



RESOLUCION No. DESAJMER21-11420  
30 de septiembre de 2021

*"Por medio de la cual se ordena la suspensión de pagos a servidores judiciales derivados de incapacidades medicas superiores a 180 días"*

**EL DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**

*En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 103 numeral SECCIONAL*

*6° de la Ley 270 de marzo 14 de 1.996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y*

**CONSIDERACIONES**

El señor **JARAMILLO OROZCO HEVER LEON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía número 98.505.941, se encuentra vinculado a la Rama Judicial del Poder Público desde el 24 de julio de 2014 y actualmente se encuentra en el cargo de Citador del Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín.

El día 21 de septiembre de 2021, se recibe por correo electrónico, escrito de incapacidad con fecha del 21 de septiembre de 2021, la cual suma, un total de 250 días, ininterrumpidamente por Enfermedad General.

Consultadas las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, en el sistema de Recursos Humano y Nómina Efinomina, se evidencia que el señor Jaramillo Orozco, pertenece a E.P.S. SURA.; Fondo de Pensiones PROTECCION y ARL POSITIVA.

Frente a los hechos narrados anteriormente, La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín, tiene presente las siguientes consideraciones:

Para el pago de incapacidades, debe señalarse que durante los periodos de incapacidad temporal el trabajador no recibe salario, sino un auxilio por incapacidad, que se pagara como a continuación se especifica:

1. Que, tratándose de enfermedad de origen común, el auxilio por incapacidad, se reconocerá por el Sistema, a través de la EPS a la cual el trabajador se encuentre afiliado, hasta 180 días continuos de incapacidad.
2. Que, tratándose de enfermedad de origen laboral, el auxilio por incapacidad, se reconocerá a través de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la cual el trabajador se encuentre afiliado, hasta 180 días continuos de incapacidad.
3. En efecto, el auxilio por incapacidad, se define como el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que hacen las EPS o las ARL a sus afiliados cotizantes no pensionados, por todo el tiempo en que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su

profesión u oficio habitual. En ningún caso se le pagará a un afiliado al sistema simultáneamente incapacidad por enfermedad general, incapacidad por enfermedad profesional y pensión de invalidez.

4. Que, tratándose de enfermedad calificada de origen común, cuya incapacidad es superior a ciento ochenta (180) días continuos, la obligación de pagar el Auxilio económico es de la Administradora del Fondo de Pensiones (AFP), al cual el trabajador se encuentre afiliado.

5. Que, tratándose de enfermedad calificada de origen laboral, cuya incapacidad es superior a ciento ochenta (180) días continuos, la obligación de pagar el Auxilio económico es de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), al cual el trabajador se encuentre afiliado.

En relación, al pago de Prestaciones Sociales, se tendrá en cuenta lo señalado en el párrafo del artículo 18 del Decreto 3135 de 1968 “por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”

**“Artículo 18º.- Auxilio por enfermedad.** En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores, ocasionada por enfermedad, los empleados o trabajadores tendrán derecho a que la respectiva entidad de previsión social les pague, durante el tiempo de la enfermedad, las siguientes remuneraciones:

a) Cuando la enfermedad fuere profesional, el sueldo o salario completo durante ciento ochenta (180) días, y

b) Cuando la enfermedad no fuere profesional, las dos terceras partes del sueldo o salario durante los primeros noventa (90) días, y la mitad del mismo por los noventa (90) días siguientes.

**Parágrafo-** La licencia por enfermedad no interrumpe el tiempo de servicio.

**Cuando la incapacidad exceda de ciento ochenta (180) días, el empleado o trabajador será retirado del servicio, y tendrá derecho a las prestaciones económicas y asistenciales que este Decreto determina**” (cursiva, negrita y subraya fuera del texto)

En ese orden de idea, es claro que el legislador estableció el reconocimiento, pago de primas y prestaciones sociales hasta el día ciento ochenta (180) de incapacidad, y que a partir del día ciento ochenta y uno (181) de incapacidad continua y mientras se resuelve la situación de capacidad para laborar del trabajador -en el plazo máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días, cuando se trata de accidente o enfermedad común, bien sea con reconocimiento pensional o con indemnización por pérdida de la capacidad laboral-, el legislador previó a favor del incapacitado, tal y como se desprende de las disposiciones consagradas en los artículos 1º del Decreto 819 de 1989 y 23 del Decreto 2463 de 2001, como única retribución o derecho, el pago del subsidio económico por enfermedad, a cargo del respectivo Fondo de Pensiones o de la Administradora de Riesgos Laborales, sin que se

genere para el pagador de la Rama Judicial ninguna obligación por concepto de prestaciones sociales o demás emolumentos remuneratorias, entre otros los previstos en los artículos 12 del Decreto 717 de 1978 y 42 del Decreto 1042 de 1978, y en los Decretos 1306 de 1978, 247 de 1997 y 3899 de 2008, como quiera que la cancelación de esos conceptos salariales tiene como requisito sine qua non la efectiva prestación del

servicio por parte del empleado o funcionario Judicial, evento que no ocurre cuando está incapacitado de donde se deriva que no hay lugar a reconocimiento de salario ni prestación social alguna por parte del empleador Rama Judicial, pero si al subsidio económico por enfermedad el cual está a cargo del Fondo de Pensiones.

De otro lado, en **Sentencia T-920/09, Referencia: Expediente T-2.317.440**. Sala Cuarta de Revisión de la **Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Mauricio González Cuervo**, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, han hecho el siguiente pronunciamiento pronunciado lo siguiente:

“Así las cosas, de conformidad con el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, el artículo 227 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 23 del Decreto 2461 de 2001, el trabajador incapacitado tiene derecho a que la E.P.S. a la cual se encuentre afiliado, le reconozca y pague las incapacidades laborales generadas por enfermedad de origen común hasta el día 180. **A partir del día 181, el pago de dicha prestación se encuentra a cargo de la respectiva A.F.P. a la cual se encuentra afiliado el trabajador, hasta que se produzca el dictamen de pérdida de la capacidad laboral y como resultado del mismo, se lleque a la conclusión de que aquel tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez. En caso contrario, y en la medida en que se sigan generando incapacidades laborales, la A.F.P. debe continuar con el pago de las mismas, hasta que el médico tratante emita un concepto favorable de recuperación o se pueda efectuar una nueva calificación de invalidez**”. (negrita, subraya, cursiva nuestra).

Para finalizar, y en el entendido del objeto de análisis, se hace mención a la **Sentencia T-137/12, Referencia: expedientes T- 3.192.708, T-3.247.258, y T- 3.242.540 (acumulado)**. Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional. Magistrado Ponente: HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO

“.(...)”

En conclusión, en caso que, al trabajador, por causa de su estado de salud, le sean expedidas por su médico tratante, incapacidades y éstas no superen los 180 días, en primer lugar, le corresponde a la Empresa Promotora de Salud el pago de las mismas; sin embargo, **en el evento que se sobrepasen los 180 días, el responsable de su pago es el fondo de pensiones, ya sea hasta que se produzca un dictamen sobre su pérdida de capacidad laboral o se restablezca su salud**. Si el dictamen indica que el trabajador presenta una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, se causará en su favor la pensión de invalidez, siempre y cuando se cumpla con los demás requisitos legales.

Igualmente, si el dictamen de pérdida de capacidad laboral arroja que el trabajador presenta una incapacidad inferior al 50%, y se siguen prescribiendo incapacidades laborales por el médico tratante, le corresponderá al fondo de pensiones seguir pagándolas, siempre que exista concepto favorable de rehabilitación o hasta que este se emita, o se pueda efectuar una nueva calificación de su invalidez.

En cualquiera de los dos eventos descritos en los párrafos precedentes, el empleador está obligado a mantener el vínculo jurídico laboral con el trabajador, y a continuar con el pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, conforme con lo que establezca el concepto sobre su rehabilitación”. (negrita, subraya, cursiva nuestra).

Así las cosas y de conformidad con lo antes expuesto, si bien es cierto la Administración Judicial no tiene obligación alguna en el Pago del Auxilio Económico por Enfermedad, también lo es que la Entidad viene asumiendo la cancelación de dicha prestación fundamentalmente en aras de garantizar a sus empleados y funcionarios el Mínimo Vital durante una situación grave de salud, en el entendido que las sumas abonadas por ese concepto al servidor judicial deberán ser reintegradas en su totalidad, bien sea por la EPS, la AFP, ARL o por el mismo beneficiario.

En mérito de lo expuesto, el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Medellín,

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR** a partir del 01 de octubre de 2021 inclusive, la suspensión de pago por nómina de cualquier emolumento de carácter salarial y prestacional, así como el auxilio por enfermedad, a favor del señor **JARAMILLO OROZCO HEVER LEON**, identificado(a) con cedula de ciudadanía número 98.505.941, se encuentra vinculado a la Rama Judicial del Poder Público desde el 24 de julio de 2014 y actualmente se encuentra en el cargo de Citador del Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín, quien se encuentra incapacitado desde el veinticuatro (24) de enero de dos mil veintiuno (2021) al diecisiete (17) de octubre de dos mil veintiuno (2021), para un total de doscientos cincuenta (250) días, ininterrumpidamente por enfermedad general.

**ARTÍCULO SEGUNDO: CONTINUAR** cancelando únicamente los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensión y Salud, en aras de proteger el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida del trabajador.

**ARTICULO TERCERO: RECURSOS.** Contra la presente Resolución procede los recursos de reposición ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín y el de apelación ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, que deberán interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**ARTÍCULO CUARTO: VIGENCIA.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

### **NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en Medellín - Antioquia, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2021.



**JUAN CARLOS PELÁEZ SERNA**

Director Ejecutivo Seccional

Alejandro Valencia B.